

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 21 de octubre de 2003.

Vistos los autos: "Fundación Pérez Companc c/ Estado Nacional —DGI— s/ Dirección General Impositiva".

Considerando:

1º) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, admitió la pretensión de reintegro por impuesto a las ganancias y la rechazó respecto del impuesto a los capitales y supuestos errores en su liquidación.

2º) Que para decidir en el sentido indicado la alzada consideró que la actora, al presentar las solicitudes de devolución, no mantenía deudas con la Dirección General Impositiva ni se advertía incumplimiento de la resolución general 2224. Sostuvo que la demandante satisfacía los requisitos del art. 20, inc. f, de la ley de impuesto a las ganancias vigente en el período en debate —ejercicios 1986, 1987, 1988— pues en su carácter de fundación poseía acciones de la Compañía Naviera Pérez Companc. Entendió que la norma no exige mantener en el patrimonio durante el lapso de dos años la totalidad de la participación accionaria original, sino sólo aquellas acciones en virtud de las cuales se solicita la devolución, sin que corresponda computar los dividendos de las que al fin del mencionado período ya no pertenezcan al peticionante. En cambio, juzgó que no cabía el beneficio respecto del impuesto sobre los capitales pagados por la Compañía Pérez Companc y el Banco Río de la Plata, por cuanto en caso de disolución de la entidad el estatuto no dispone que los bienes pasen al Estado Nacional, provincial o municipal conforme con lo previsto en la normativa aplicable (ley 21.287 y decreto 1692/76) sino a la Conferencia Episcopal Argentina. Respecto de los intereses, consideró que debían aplicarse las tasas establecidas por

distintas resoluciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y no las previstas en el art. 42 de la ley 11.683. Estimó que era confuso el agravio de la demandada atinente al cómputo de los accesorios y que respecto de su liquidación mensual no se justificaba el perjuicio concreto que irrogaba esa forma de cálculo.

3°) Que contra tal sentencia ambas partes interpusieron sendos recursos ordinarios de apelación que fueron concedidos a fs. 588/588 vta. Los respectivos memoriales obran a fs. 608/622 y 623/631 y la única contestación tempestiva —la de la actora— a fs. 635/641.

4°) Que, al ser este Tribunal el juez del recurso, corresponde examinar si el recurso ordinario deducido a fs. 568/569 por la actora, ha sido concedido debidamente. En efecto, para que dicha impugnación sea admisible es necesario —entre otros requisitos— que el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de \$ 726.523,32 (conf. art 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, modificado por la ley 21.708, y resolución 1360/91 de esta Corte, publicada en Fallos: 314:989).

5°) Que la expresión "sin sus accesorios" determina que los intereses devengados no pueden ser tenidos en consideración para establecer, a aquel efecto, el monto disputado (confr. Fallos: 300:1282), sin que exista razón alguna que determine que con respecto a los intereses generados a partir del 1° de abril de 1991 deba adoptarse un criterio distinto, pues el hecho de que desde entonces no corresponda la actualización monetaria no altera el carácter accesorio que revisiten aquéllos (Fallos: 319:254 y su cita, entre muchos otros).

6°) Que, por lo tanto, el recurso deducido por la actora es improcedente, ya que, según se indica en el escrito

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

de su interposición, el monto actualizado del juicio sólo supera el límite legal a que se ha hecho referencia si —tal como surge del peritaje contable al que la parte se remite (fs. 268/280, 401/445)— se le suman los intereses devengados a partir del 1° de abril de 1991, adición que, como se señaló, no corresponde efectuar. Por lo demás, a fin de acreditar el monto del agravio la parte incluye el valor por el que prosperó la demanda, es decir, aquel por el que no pretende la modificación de la sentencia.

7°) Que, en atención a lo expuesto, la actora no ha cumplido con la carga procesal de acreditar el monto del agravio. El incumplimiento de tal requisito trae aparejada la improcedencia formal de la apelación ante esta Corte por ausencia de uno de los presupuestos esenciales de admisibilidad del recurso, sin que obste a esta decisión el hecho de que la alzada lo haya concedido (Fallos: 314:1455; 322:2485, entre otros).

8°) Que, en cambio, la apelación interpuesta por la demandada es formalmente admisible pues se dirige contra una sentencia definitiva en que la Nación es parte y el monto del agravio excede el mínimo legal según surge con claridad de los elementos objetivos que obran en el proceso (Fallos: 315:2369; 320:349; 323:435).

9°) Que los agravios por los cuales la recurrente pretende revertir lo decidido por la cámara pueden resumirse así: a) el peritaje demuestra la existencia de deuda exigible y, en consecuencia, la actora no dio cumplimiento a la resolución general 2224, cuya inaplicabilidad arguyó en contradicción con sus propios actos; b) la recta inteligencia del art. 20, inc. f, de la ley de impuesto a las ganancias impone concluir que la norma se refiere a las acciones sociales en su

universalidad; c) lo decidido respecto de los intereses se halla reñido con la ley 23.982 pues los bonos de consolidación incluyen accesorios; d) la revocación de la sentencia debe conducir a que se impongan las costas a la actora.

10) Que la primera de las objeciones reseñadas en el considerando precedente introduce cuestiones que no han sido planteadas en la instancia precedente, por lo que exceden el conocimiento de la Corte cuando conoce por esta vía (Fallos: 289:329; 298:492; 312:696, entre otros). Ello es así, pues al expresar agravios ante la cámara sostuvo que del peritaje no surgía la existencia o inexistencia de deuda, extremo éste que incumbía demostrar a la actora (conf. fs. 541/542), sin exponer argumento alguno con apoyo en el cuadro elaborado por la experta acerca de aquel punto ni sobre la doctrina de los actos propios que invoca en el memorial (conf. fs. 626/627 vta.).

A ello se agrega que la apelante reconoce que la actora canceló las deudas exigibles que surgían del cuadro pericial (fs. 626 vta.) y, aunque lo haya hecho con posterioridad a la presentación de las solicitudes de devolución de los períodos 1987 y 1988, lo cierto es que la resolución R.G. (D.G.I.) 2224 no exigía que el peticionario no adeudara obligaciones fiscales líquidas y exigibles al momento de interponer la solicitud; antes bien, posibilitaba que aquéllas fueran canceladas con anterioridad a que el organismo estatal resolviera, pues lo facultaba a efectuar requerimientos para sanear las omisiones de la presentación, a fin de que se verificara el cumplimiento de los requisitos inobservados.

Asimismo, respecto de un ejercicio (1986) se limita a reiterar un genérico planteo acerca del *onus probandi* que no aporta ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta de la adoptada (Fallos:

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

315:689, entre otros).

11) Que en cuanto a la interpretación del art. 20, inc. f, de la ley de impuesto a las ganancias, la recurrente no rebate el argumento del a quo que sostiene que la intención del legislador es clara en función del monto invertido y ella se vería desvirtuada si, ante una variación en la participación accionaria inferior a 2% en los dos años posteriores al cierre del ejercicio fiscal, se privara a la actora de la totalidad del beneficio. Tal omisión de crítica produce la deserción del recurso (Fallos: 313:1242, entre otros).

12) Que la disconformidad que la apelante expresa respecto de los intereses no se hace cargo de los argumentos desarrollados por la sentencia y, en consecuencia, no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se estiman equivocadas (arts. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En efecto, la recurrente de modo dogmático sólo expresa que las tasas no se compadecen con la ley 23.982 pero nada dice acerca de lo expuesto por la alzada con sustento en su propia jurisprudencia.

13) Que, en rigor, la queja atinente a las costas se halla supeditada al progreso de la pretensión recursiva, que no puede prosperar por su insuficiencia técnica.

Por ello, se declara mal concedido el recurso ordinario de apelación interpuesto por la actora, sin que corresponda imponer costas en esta instancia en razón de que la apelada no cuestionó la procedencia formal del mencionado recurso en orden al requisito examinado, y se confirma la sentencia apelada en cuanto ha sido objeto de agravios. Con costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase. CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.

ES COPIA